

Bogotá, D. C.

Señor

DANIEL EDUARDO OSORIO

Correo electrónico: desarrollosostenibletolima@gmail.com

Asunto: Alcance al radicado Ambiente No. 2025E1061765 del 18 de noviembre de 2025 "DERECHO DE PETICION DE INFORMACION ART.14 LEY 1437 DE 2011"

Respetado Señor Osorio,

Este Ministerio recibió el fallo de tutela del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el pasado 09 de enero de 2026 que dentro de su parte motiva indica:

"Asimismo, se observa que, aunque la parte demandada emitió respuesta al señor Osorio Vanegas, esta no cumple cabalmente con las exigencias reiteradas por la Corte Constitucional para garantizar el derecho fundamental de petición, en cuanto a que la respuesta debe ser congruente e idónea. Ello, por cuanto el accionante estructuró su solicitud en quince (15) preguntas, de las cuales el Ministerio únicamente desarrolló diez (10)".

Y en consecuencia ordenó:

"PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Daniel Eduardo Osorio Vanegas.

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncie sobre cada uno de los interrogantes formulados por la accionante en su solicitud del 15 de noviembre de 2025, con el fin de restablecer su derecho fundamental de petición vulnerado, conforme a lo expuesto en precedencia (...)"

En consecuencia, esta cartera ministerial se permite dar alcance al radicado No. 2025E1061765 del 18 de noviembre de 2025, precisando que, en el radicado No. 2025E1061765 que ingresó a la DBBSE había únicamente 10 preguntas, a las cuales se dio respuesta por parte de esta Dirección mediante oficio No.

21022025E2043812, sin embargo, esto no nos exime de dar la contestación a las 16 preguntas que plantea el peticionario.

Según lo ordenado en el fallo de tutela, nos permitimos complementar la respuesta de las 10 preguntas allegadas en un principio y adicionalmente a esto, responder a las otras 6 preguntas, en los siguientes términos:

1. ¿Cuál es la competencia del Ministerio respecto a las áreas protegidas en Colombia?

La competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se fundamenta principalmente en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011. En su calidad de rector del sector ambiente, el Ministerio tiene funciones de formulación de política, regulación, orientación y coordinación en materia ambiental.

En relación específica con las áreas protegidas, el Ministerio es competente para:

- Formular la política pública del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.
- Definir lineamientos técnicos y normativos para la declaratoria, gestión y manejo de las áreas protegidas.
- Reservar, alinderar, realinderar, sustraer y recategorizar áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y otras áreas de competencia nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 numerales 13 y 14 del Decreto 3570 de 2011.

Estas funciones se ejercen sin perjuicio de las competencias asignadas a otras autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental – SINA.

2. ¿Cuáles son los principales instrumentos y/o medidas jurídicas que regulan las áreas protegidas en Colombia?

Los principales instrumentos jurídicos que regulan las áreas protegidas en Colombia son: acto administrativo de declaratoria, expedido por la autoridad ambiental competente, mediante el cual se crea el área protegida y se define su categoría de manejo; Plan de Manejo Ambiental, obligatorio conforme al Decreto 1076 de 2015, que establece la zonificación, objetivos de conservación, usos permitidos, prohibiciones y estrategias de manejo para el área; el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, como instrumento oficial de inscripción y registro.

Adicionalmente existen normas de planificación y ordenamiento ambiental del territorio que deben armonizarse con las áreas protegidas (POT, POMCA, entre otros).

3. ¿Qué efectividad ha tenido la declaratoria de las áreas protegidas en Colombia desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia 1991?

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, que elevó la protección ambiental a rango constitucional (artículos 8, 79 y 80), la declaratoria de áreas protegidas se ha consolidado como una de las estrategias principales para la conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, son funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otras: coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de áreas protegidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho Sistema, por lo que es dicha entidad la competente para dar respuesta de fondo a dicha consulta.

4. ¿Cuál es el marco jurídico y cuál es la Política Pública de las áreas protegidas?

El marco jurídico de las áreas protegidas en Colombia está conformado, entre otras normas, por la Constitución Política de Colombia de 1991; la Ley 99 de 1993, y el Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015, que regula el SINAP, las categorías de manejo y su articulación institucional.

La Política Pública vigente es la Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, actualizada mediante el CONPES 4050 de 2021, que orienta la gestión, gobernanza y articulación interinstitucional del sistema.

Adicionalmente cada área protegida para su declaratoria tiene un acto administrativo para su creación, y un plan de manejo ambiental que define las zonas, actividades y usos permitidos al interior de esta.

5. ¿Cuántas áreas protegidas existen en Colombia?

De Acuerdo con el Registro Único de Áreas Protegidas – RUNAP, en la fecha de consulta 20 de enero de 2026, el número de áreas protegidas registradas corresponde a 1837.

6. ¿Existe algún registro y de ser así quién es el encargado de llevarlo?

El RUNAP es el registro oficial del SINAP y su administración corresponde a Parques Nacionales Naturales de Colombia, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

7. ¿Existe un informe periódico sobre las áreas protegidas? De ser así por favor remitir copia de los 3 últimos que se han emitido

La normativa colombiana no establece un único informe periódico consolidado obligatorio para todas las áreas protegidas del país. No obstante, la información oficial y actualizada se reporta y consulta a través del RUNAP, que funciona como el principal instrumento de seguimiento y registro, puede ser consultado a través <https://runap.parquesnacionales.gov.co/>.

Parques Nacionales Naturales de Colombia con entidad administradora del RUNAP y de coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de áreas protegidas, es la competente para dar una respuesta de fondo a esta consulta.

8. ¿Qué indicadores se reporta?

En el RUNAP <https://runap.parquesnacionales.gov.co/> se reportan, entre otros, los siguientes indicadores e información:

- Número de áreas protegidas por categoría de manejo.
- Extensión y localización geográfica.
- Autoridad ambiental responsable.
- Actos administrativos de declaratoria y modificaciones.
- Existencia y estado de los planes de manejo.

Esta información constituye la base oficial para el seguimiento del SINAP y para los reportes nacionales e internacionales en materia de conservación.

9. ¿Qué categorías existen o cómo se clasifican?

El Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015, clasifica las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en las siguientes categorías:

Áreas protegidas públicas:

- a). Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
- b). Las Reservas Forestales Protectoras
- c). Los Parques Naturales Regionales
- d). Los Distritos de Manejo Integrado

- e). Los Distritos de Conservación de Suelos
- f). Las Áreas de Recreación

Áreas protegidas privadas:

- g). Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil

10. ¿Existen áreas marinas protegidas y qué entidad es la encargada de estas?

Colombia cuenta con un robusto sistema de Áreas Marinas Protegidas. Debido a que el país tiene costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, estas áreas son vitales para proteger ecosistemas como arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos, entre otros.

La gestión de estas áreas es compartida por varias entidades dependiendo de su categoría, pero el eje central es:

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN): Es la entidad principal encargada de la administración y manejo de las áreas de carácter nacional (como Parques Nacionales y Santuarios de Fauna y Flora).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Se encarga de la política pública y de declarar nuevas áreas protegidas.

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o de desarrollo sostenible: Las corporaciones costeras (como CODECHOCÓ, CORPOGUAJIRA o CORALINA) administran áreas de carácter regional.

INVEMAR: El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras brinda el soporte científico y técnico para la toma de decisiones.

Todas estas áreas se articulan bajo el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP), que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

11. Desde la práctica, ¿el Ministerio de Ambiente evidencia que la ciudadanía respeta las áreas protegidas? ¿Y qué controles o mecanismos existen en Colombia para verificar que la gente proteja las áreas protegidas?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible evidencia una realidad con dos caras en sus áreas protegidas, mientras existe un creciente compromiso ciudadano (evidenciado especialmente en el ecoturismo y la ciencia ciudadana), las áreas protegidas siguen enfrentando presiones críticas como la deforestación, la minería ilegal y la expansión agrícola.

Ejemplo de ello es el incremento en la gobernanza comunitaria. Muchas comunidades indígenas, afro y campesinas hoy día son guardias del territorio a través de figuras como las OMEC (Otras Medidas de Conservación basadas en Áreas). Colombia ha protegido un gran porcentaje de hectáreas bajo estas figuras, donde la voluntad y el respeto ciudadano son el motor principal.

Los mecanismos para verificar si se protegen las áreas protegidas se basan en un sistema de Prevención, Control y Vigilancia que incluye tecnología y monitoreo espacial, mediante la cual guardaparques de PNN logran registrar en tiempo real (vía GPS) hallazgos de pesca ilegal, tala o presencia de infractores durante sus recorridos. Así mismo, el IDEAM e institutos como INVEMAR, monitorean periódicamente cambios en la cobertura vegetal o arrecifes. Existen también puestos de control en las entradas de PNN en los que se registran los visitantes y se prohíbe el ingreso de elementos no permitidos y mascotas. De igual manera la ciudadanía puede reportar delitos ambientales ante las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) o ante la Policía Ambiental.

En caso de cometerse una infracción al interior de un área protegida, existen sanciones administrativas (Ley 1333 de 2009) y sanciones penales (Ley 2111 de 2021).

12. ¿Qué sentencias judiciales relevantes existen en Colombia que han marcado la gestión y su aplicación práctica de los espacios protegidos?

Las altas cortes (Constitucional y Suprema) han emitido fallos históricos que no solo protegen la biodiversidad, sino que han otorgado derechos propios a los ecosistemas. Algunas de las más relevantes son:

- La Amazonía como "Sujeto de Derechos" (Sentencia STC 4360 de 2018). La Corte Suprema ante el aumento de la deforestación, reconoció a la Amazonía colombiana como una entidad titular de derechos.
- El Río Atrato como "Sujeto de Derechos" (Sentencia T-622 de 2016). La Corte Constitucional declaró que el río Atrato, sus cuencas y afluentes (muchos de los cuales están en áreas protegidas del Chocó) son sujetos de derechos.
- Prohibición total de la Caza Deportiva (Sentencia C-045 de 2019). La Corte Constitucional prohibió la caza deportiva en todo el país, incluyendo las zonas de reserva.
- Blindaje contra la Minería en Páramos (Sentencia C-035 de 2016). Esta sentencia prohibió tajantemente las actividades de exploración y explotación de recursos no renovables (minería e hidrocarburos) en los ecosistemas de páramo.

- Inembargabilidad e Inalienabilidad (Sentencia C-649 de 1997). Establece que las áreas del Sistema de Parques Nacionales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- Limitación de la Propiedad Privada (Sentencia C-189 de 2006). La Corte aclaró que, si bien puede haber propiedad privada dentro de un Parque Nacional (compras previas a la declaratoria), el Estado puede imponer limitaciones extremas al uso de ese suelo.

13. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la declaratoria de áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad?

El impacto que ha tenido la declaratoria de áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad puede resumirse en tres grandes frentes:

- Representatividad y Metas Globales

Colombia ha logrado proteger más del 31% de su territorio terrestre y el 37% de su territorio marino. Este impacto es histórico, ya que superó la meta internacional del "30x30" (Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad: proteger el 30% del territorio nacional para el año 2030) ocho años antes de lo previsto.

- Recuperación y Estabilidad de Ecosistemas

- Conservación de coberturas: En las áreas administradas por PNN, cerca del 97% de las coberturas naturales se mantienen o han mejorado su estado de conservación.
- Refugios de biodiversidad: Los parques nacionales albergan aproximadamente el 32% de la biodiversidad conocida del país, con más de 1.9 millones de registros biológicos.
- Restauración: Se han recuperado miles de hectáreas en zonas críticas (como manglares y bosques andinos) que antes estaban degradadas, gracias a programas de restauración activa.

- Conectividad Ecológica a través de la conformación de corredores biológicos, como por ejemplo:

- El Corredor Marino del Pacífico (CMAR): La protección de Malpelo y Gorgona, junto con áreas de Ecuador, Panamá y Costa Rica, permite que especies migratorias (tiburones martillo, ballenas jorobadas y tortugas) tengan una ruta segura sin riesgo de pesca industrial en millones de hectáreas.
- Áreas Regionales: Las áreas protegidas regionales y las reservas privadas aportan el 21% de la conectividad del sistema, permitiendo que la fauna se desplace entre los grandes parques nacionales.

14. ¿Qué fortalezas, debilidades, desafíos y lecciones aprendidas puede referir el Ministerio de Ambiente respecto a la conservación de la biodiversidad?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en sus informes de gestión y proyecciones hacia el 2026, plantea un balance bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida":

- Fortalezas: Liderazgo y Ciencia
 - Liderazgo global y metas cumplidas: Colombia es referente mundial al haber protegido el 37% de sus áreas marinas y más del 30% de sus áreas terrestres años antes del plazo de 2030 (Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad).
 - Ciencia ciudadana y datos abiertos: El país es el segundo en el mundo con más datos públicos sobre biodiversidad. El SiB Colombia (Sistema de Información Biológica) ha integrado más de 15 millones de nuevos registros, lo que permite tomar decisiones basadas en evidencia técnica.
 - Nuevas figuras de conservación: La consolidación de las OMEC (Otras Medidas de Conservación Basadas en Áreas) permite proteger 15 millones de hectáreas adicionales mediante la gestión de comunidades locales, no solo mediante decretos estatales.
- Debilidades: Presencia y Recursos
 - Falta de control territorial efectivo: En varios parques nacionales (especialmente en la Amazonía y el Catatumbo), el Estado no tiene control total debido a la presencia de grupos armados ilegales que impiden la labor de los guardaparques.
 - Brecha presupuestal: A pesar de que el "Fondo para la Vida y la Biodiversidad" cuenta con cerca de 4 billones de pesos, la magnitud de la restauración necesaria supera la capacidad financiera actual.
- Desafíos: El "Punto de No Retorno"
 - Deforestación crítica: En 2026 se espera reducir la deforestación a 30,000 hectáreas por año, actividad impulsada por la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.
 - Paz con la naturaleza: Integrar la conservación en las negociaciones de paz. Esta cartera ministerial busca que los acuerdos de paz incluyan compromisos ambientales para evitar que el fin del conflicto dispare la explotación de recursos.

- Crisis climática: La pérdida de biomasa en la Amazonía oriental, incluso donde no hay deforestación directa, sugiere que el ecosistema está llegando a un punto de degradación irreversible que requiere cooperación de los países de la región.
- Lecciones Aprendidas
 - La conservación no es sin la gente: La gobernanza comunitaria y los acuerdos de uso sostenible son más efectivos que la vigilancia policial exclusiva.
 - El agua como eje ordenador: El ordenamiento del territorio debe hacerse alrededor del agua y no de los títulos mineros o agrarios. Esto ha permitido blindar páramos y zonas de recarga hídrica de manera más eficiente.
 - La biodiversidad como activo económico: Se ha entendido que la conservación debe generar ingresos. Programas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el ecoturismo comunitario son pilares para que la protección del bosque tenga más rentabilidad que talarlo.

15. Desde la experiencia que tiene el Ministerio, ¿qué falencias encuentra en el marco jurídico sobre las áreas protegidas y en la política pública de estas?

Podrían existir algunas falencias a nivel de marco jurídico y de política públicas que dificulten la protección de las áreas protegidas:

Conflictos de Uso y Ocupación: La ley actual (principalmente el Decreto-Ley 2811 de 1974) no ofrece una solución clara para las comunidades campesinas que habitaban los parques antes de su declaratoria. Esto crea un "limbo jurídico" donde el Estado no puede titular tierras pero tampoco puede desalojar a miles de personas, generando conflictos socioambientales persistentes.

Régimen Sancionatorio Lento: Aunque la Ley 2111 de 2021 endureció las penas por delitos ambientales, la justicia administrativa (multas) sigue siendo lenta. Muchas veces, el daño ambiental es irreversible antes de que la sanción económica quede en firme.

Incompatibilidad con el Subsuelo: Persiste una tensión jurídica entre la protección del suelo (ambiental) y el subsuelo (minero/energético). Aunque los Parques Nacionales están blindados, otras categorías de áreas protegidas enfrentan vacíos legales que permiten interpretaciones a favor de la explotación de recursos.

Desarticulación del SINAP: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) sufre de una fragmentación entre lo nacional y lo regional. Las áreas declaradas por Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a veces carecen de los mismos estándares de rigor o presupuesto que los Parques Nacionales.

Dependencia de la Cooperación Internacional: Una falencia crítica es la falta de financiación interna estable. Gran parte de la gestión de las áreas protegidas depende de donaciones extranjeras, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo si cambian las prioridades internacionales.

16. ¿Qué recomendaciones técnicas y jurídicas considera el Ministerio que se deben tener en cuenta para fortalecer los sistemas de las áreas protegidas?"

Para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con miras al 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha trazado una hoja de ruta que busca transitar de una conservación puramente "restrictiva" a una de "gobernanza inclusiva".

El Ministerio de Ambiente y diversos sectores legislativos han impulsado la necesidad de una Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (o reformas equivalentes como el Proyecto de Ley 058 de 2025) que incluya:

- **Saneamiento Predial y "Títulos Verdes":** Crear un marco legal que permita la adjudicación de baldíos o formalización de la tenencia a comunidades campesinas dentro de áreas de reserva (como las de Ley 2ª de 1959), bajo la condición de mantener el bosque (títulos condicionados a servicios ambientales).
- **Seguridad y Defensa Ambiental:** Habilitar protocolos jurídicos que permitan una coordinación más fluida con la Fuerza Pública y la Fiscalía para la intervención en áreas donde las economías ilegales (minería y coca) han desplazado la autoridad de los guardaparques.
- **Autonomía Financiera:** Fortalecer la figura de los Fideicomisos Públicos y fondos específicos (como el Fondo para la Vida) para que los recursos recaudados por tasas ambientales o compensaciones se reinviertan directamente en el mantenimiento de las áreas y no se diluyan en el presupuesto general.
- **Justicia Agraria y Ambiental:** Armonizar la Ley 2111 de 2021 (Delitos Ambientales) con la creación de una jurisdicción agraria que resuelva rápidamente los conflictos de uso del suelo en zonas amortiguadoras.

Desde lo técnico, se recomienda migrar hacia una gestión de "Paisajes Conectados":

- Efectividad de Manejo (Herramienta SMART): Estandarizar el uso de tecnologías de monitoreo en tiempo real en todos los niveles (nacional y regional) para que la respuesta ante incendios o tala sea inmediata y no dependa de reportes trimestrales.
- Ordenamiento alrededor del Agua: Las áreas protegidas no deben verse como islas. La recomendación técnica es que sean los Determinantes Ambientales (zonas de recarga hídrica, páramos) los que definan el crecimiento urbano y agrícola de los municipios vecinos.
- Concesiones Forestales Campesinas: Implementar técnicamente la reglamentación (Resolución 0057 de 2025) que permite a las comunidades aprovechar productos no maderables del bosque (frutos, resinas, turismo), convirtiendo a la biodiversidad en un motor económico legal.
- Bioeconomía en el SINAP: Desarrollar protocolos técnicos para la bioprospección y la investigación científica que permitan que Colombia capture valor de sus recursos genéticos protegidos.

Estaremos atentos a cualquier inquietud o información adicional, para brindar el apoyo que corresponda, de conformidad con las funciones de este Ministerio.

Cordialmente,

NATALIA MARÍA RAMIREZ MARTÍNEZ

Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Proyectó: Olga Lucía Núñez Izquierdo – Contratista DBBSE
Revisó: Katherine Palacios – Contratista GGIBRFN de la DBBSE
Aprobó: Guillermo Orlando Murcia / Profesional Especializado GGIBRFN de la DBBSE
Sandra Carolina Díaz Mesa/ Coordinadora GGIBRFN de la DBBSE